

*Cuidado, Entre Menos se le use, Mejor*

## **Ejército y Cananeas del Futuro**

- ★ **Simbolismo que Incluso en el Exterior Notaron**
- ★ **Preferible Utilizar Sólo Instrumentos Políficos**
- ★ **Es Importante no Humillar a los que van a Perder**

**LORENZO MEYER**

¿El ejército en Cananea, y no como recurso de última instancia sino de primera? Es de desear que los civiles responsables del actual proceso político sean más cuidadosos en el uso de ese peculiar instrumento político que son las fuerzas armadas. Entre menos se le use en las cananeas del futuro... mejor para todos, incluido desde luego el propio ejército.

El simbolismo de la ocupación militar de Cananea resultó ser de tal magnitud que hasta los medios internacionales de comunicación lo notaron. Así, por ejemplo, la edición latinoamericana del Newsweek del 4 de septiembre, usó la espectacular toma el 20 del mes pasado por el ejército de la gran e histórica mina de Cananea para ilustrar —incluso gráficamente— lo que es, desde su punto de vista, el thatcherismo latinoamericano en acción. Y por thatcherismo se entiende, entre otras cosas, la política gubernamental de entrega masiva y sin apelación de las ineficientes y corruptas empresas estatales o de participación estatal, al capital privado, incluido el extranjero.

# EJERCITO Y CANA

Sigue de la primera plana

La sorpresiva —pero no inesperada— toma militar de Cananea en una madrugada dominical fue una operación en gran escala, que implicó el uso de helicópteros y de cientos de soldados, posiblemente miles (una publicación calculó el total de efectivos que tomaron parte en la operación en 5 mil). La acción fue justificada por las autoridades como preventiva, indispensable para evitar que la dinamita o el combustible almacenados en las instalaciones fueran usados por algún "enemigo" no identificado pero supuestamente terrible, para dañar la planta. Quizá los temores oficiales eran fundados, pero también hay elementos para suponer lo contrario. En cualquier caso, la operación militar resultó excelente y definitiva para lograr desalojar sin problemas y en un tiempo mínimo a los 600 obreros que laboraban en el turno de la noche, e impedir que ellos y sus compañeros intentaran reanudar operaciones y en cambio se hicieran rápidamente a la idea de que la decisión gubernamental de reestructurar y

privatizar la empresa era irreversible. ★

Afortunadamente, la presencia del ejército en Cananea duró poco, pero lo breve de la ocupación no le quita lo significativo al hecho. Además, se trata sólo del más reciente episodio de una cadena. En efecto, antes que Cananea, los soldados estuvieron en las calles de Morelia para imponer un orden que se había perdido por motivo de unas elecciones poco transparentes —y esto de elecciones con resultados turbios y problemáticos, es otra cadena que se arrastra desde el sexenio pasado. Con anterioridad a Cananea y Michoacán, el ejército ya se había hecho presente con sus vehículos en las calles de la ciudad de México para suplir la ausencia de los trabajadores en huelga de la "Ruta 100". Y antes la policía militar se hizo conspícua por su presencia masiva frente a Palacio Nacional en lo que alguna vez se supuso era una ceremonia entre aliados: el desfile de los sindicatos frente al Presidente el 1.º de mayo. A principios del año, el ejército también fue uno de los protagonistas principales en el espectacular asalto a la casa de cuñen por muchos años fuera un priista distinguido; Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", y en el cuidado posterior de las instalaciones de Pemex para impedir que algunos de los seguidores del líder

del SRTPRM pudiera jugar con fuego entre el combustible. Finalmente, nadie pudo dejar de notar que en la conflictiva atmósfera política del cambio de poderes, el gran desfile militar que siguió a la ceremonia del 10. de diciembre del año pasado, tuvo como objeto algo más que el dar mero toque marcial a la ceremonia sexenal. Buscó ser un signo de advertencia a quienes ponían en cuestión el resultado de las elecciones del 6 de julio anterior.

En un pequeño artículo publicado en el número de invierno de este año de la revista *Hemisphere* (por lo visto a esta publicación le gusta salir con cierto adelanto) y titulado *A Repoliticized Military?*, el teniente coronel del ejército norteamericano, Stephen J. Wager —que ya ha publicado antes análisis sobre ciertos aspectos de nuestro ejército— toma nota de algunas de las acciones del ejército mencionadas en el párrafo anterior, pero sin negar su contenido político, concluye que no parecen ser indicio de que el papel tradicional del ejército esté cambiando. Este papel es el propio de un actor marginal y enteramente subordinado a las decisiones tomadas por los civiles. En realidad dice Wager, la mayor visibilidad política del ejército es un fenómeno que se inició el sexenio anterior y en Chiuhua, pero el hecho no debe confundirse con un aumento de la in-

fluencia política del instituto armado; sus acciones han seguido siendo producto de decisiones de los mandos civiles y básicamente han tenido un carácter preventivo. El objetivo ha sido mostrar las armas a los opositores activos o potenciales de la política presidencial para no tener que usarlas más adelante; es decir, para no incurrir en el riesgo de repetir el error de 1968.

Por su experiencia, el teniente coronel Wager debe saber de lo que habla —pasó varios años en México en contacto directo con nuestro ejército— y creo que tiene razón la presencia de militares armados fuera de sus cuarteles en Cananea o Michoacán no significa que la naturaleza del papel político del ejército mexicano haya cambiado. Sin embargo, quizá para todos sería mejor que el thatcherismo mexicano buscara usar exclusivamente instrumentos políticos civiles para enfrentar a sus contendientes y dejara al ejército en donde está: inmerso, según Wager, en un proceso de reorganización interna iniciado en el sexenio pasado, y que pone el acento en la profesionalización y no en la politización, especialmente después de ver los callejones sin salida a los que condujeron las intervenciones del ejército en política en América del Sur en momentos de crisis económicas estructurales.

# NEAS DEL FUTURO

Todos sabemos que, finalmente, aquí y en cualquier otro país y época, el poder político está asentado en la fuerza. Sin embargo, un indicador del éxito o fracaso de un sistema de dominación moderno lo constituye precisamente su capacidad para resolver las inevitables confrontaciones entre los actores políticos y clases sociales, sin hacer uso directo de la fuerza y apelando en cambio a la legitimidad, a la legalidad y a la conciliación. Para todos nosotros resulta hoy muy claro que si bien en octubre de 1968, y gracias a la acción directa del ejército, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tuvo finalmente su olimpiada sin la irritante presencia de los estudiantes que reclamaban en las calles el fin del autoritarismo, a la larga el 2 de octubre no resultó ser una solución a ningún problema y sí, en cambio, la gran derrota histórica del diazordacismo y en menor medida del régimen autoritario posrevolucionario en su conjunto. Esto, seguramente, lo saben muy bien las actuales autoridades —tanto las civiles como las militares— pero no está de más volverse los a recordar para que eviten al máximo la posibilidad de cualquier enfrentamiento entre los civiles y el ejército.

Díaz Ordaz llegó a donde llegó, porque se negó a modificar un ápice el sistema autoritario que había heredado, pese al hecho

evidente desde entonces de que la sociedad mexicana ya no era la misma que había dado origen y tolerado sin grandes problemas a ese sistema autoritario. Hoy la situación es otra. En la actualidad nadie sostiene que las cosas deben permanecer como han sido, pero en cambio hay un serio desacuerdo sobre la dirección específica, la forma y la velocidad del cambio. Y es ahí donde reside hoy el riesgo de que la violencia pueda desatarse, pese a los esfuerzos por evitarla. Y si en esa violencia se llegara a encontrar nuevamente involucrado el ejército, el peso específico de los hechos sería automáticamente mayor, y por lo mismo menores las posibilidades de volver al status quo antes.

★

Todo cambio social de la magnitud del que hoy se está llevando a cabo entre nosotros, está lleno de dificultades y peligros. Esto es particularmente cierto porque se trata de un cambio muy rápido, profundo y en circunstancias muy adversas. El cambio no se buscó ni se planeó sino que se impuso por el fracaso espectacular de un proyecto económico con el que estaba plenamente identificado el régimen. Es por ello que a partir de 1982 los dirigentes de ese régimen se han visto obligados a negar sus orígenes y su antigua fuente de legitimidad —el corporativismo, el nacionalismo y la acción

económica del Estado—, pero sin que por el momento hayan encontrado con qué sustituirla. En estas condiciones, el thatcherismo mexicano al que se refieren los medios masivos de comunicación norteamericanos, se ha visto obligado a actuar con dureza contra sectores sociales muy numerosos pero sin contar con la legitimidad que sí tenía —y aún tiene— el modelo original, el inglés.

Desde 1982, pero particularmente desde el 10 de enero de este año, el grupo dirigente lo mismo afecta sin piedad poderosos intereses creados ilegítimos —como los de La Quina y su grupo, o los de los administradores corruptos de las empresas paraestatales—, que legítimos pero opuestos a los principios básicos del neoliberalismo, como los de los trabajadores de Pemex. Y es aquí donde se ve el déficit actual de legitimidad: al actuar el gobierno contra los intereses de grupos importantes de asalariados que hasta hace muy poco tiempo eran una de las más sólidas bases sociales del régimen.

Justamente por el efecto negativo, y en cierto sentido inevitable, que el tránsito mexicano de una economía cerrada a otra abierta tiene y seguirá teniendo sobre derechos legítimos de sectores importantes de asalariados —otorgados, desde luego, en otras épocas y circunstancias— es que hoy resulta tan importante cuidar las formas y los medios, y no arrinconar ni humillar a los que van a perder. Sin embargo, despliegues de fuerza como el de Cananea resultan muy humillantes, como lo son también aquellos que desde la época de Miguel de la Madrid se hacen en todas aquellas partes del país en donde la contienda electoral lleva a resultados que no

convencen a una parte importante de la ciudadanía.

En conclusión, creo que no debería ser el Ejército, sino el liderazgo civil, quien le comunicara directamente a los sectores sociales afectados, las razones por las cuales se toman decisiones como la que llevó a cerrar la mina de cobre más grande de México. No quiero implicar con esto que considere que sea fácil para quien decide cerrar fuentes de trabajo, recortar empleos y modificar las relaciones industriales, comunicar la mala nueva a los afectados, pero esa es la responsabilidad de una autoridad civil legítima, y no es buena idea delegar esa tarea en el Ejército.

El Ejército tiene varias obligaciones legítimas sobre las cuales nadie discute, e incluso otras que sin dejar de ser legítimas quizá se deberían discutir públicamente —como es, por ejemplo, la campaña permanente para erradicar los cultivos de marijuana y amapola— pero a pocos mexicanos les puede parecer conveniente que sean los soldados los que cierren plantas industriales o los que tengan que imponer resultados electorales carentes de transparencia. La salud del Ejército y de la sociedad toda, requiere ser muy cuidadosos con ese peculiar instrumento político que son las fuerzas armadas. Desde hace buen tiempo México disfruta de una situación especial en América Latina: la despolitización de sus fuerzas armadas; busquemos todos que tal situación se mantenga alejando al Ejército de tareas que no son las adecuadas, y que pueden llevar a desandar lo andado en este terreno. Salvo en tierras de conquista —Irlanda o las Malvinas—, el thatcherismo de buena cepa se impone sin el ejército (aunque con mucha ayuda de la policía).